

informativo campesino

N° 248 | ENERO | FEBRERO | MARZO 2012



en esta edición



FNC CLAMA POR SEGURO AGRÍCOLA EN SU XIX MARCHA



2012 ARRANCA CON MÁS DE CIENTO CAMPESINOS IMPUTADOS



INTERVENCIÓN EN ÑACUNDAY CAUSA VARIAS REACCIONES



PEQUEÑOS AVANCES FRENTE A HISTÓRICAS DEMANDAS



MOVILIZACIONES EVITAN CULTIVO DE SOJA



EJECUTIVO INTERVIENE AL INDERT

sumario

N° 248 | enero | febrero | marzo | 2012



▶ nuestra opinión

CONFLICTO DE ÑACUNDAY, PRESAGIA CONTINUIDAD DE LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL 2012

pág. 4

▶ entrevista

ENTREVISTA A BEATRIZ FERREIRA, responsable operativa de CEPRA

pág. 6

▶ organizaciones campesinas

INTERVENCIÓN EN ÑACUNDAY CAUSA VARIAS REACCIONES

pág. 10

▶ manifestaciones

FNC CLAMA POR SEGURO AGRÍCOLA EN SU XIX MARCHA

pág. 14

▶ conflictos con sojeros

MOVILIZACIONES EVITAN CULTIVO DE SOJA

pág. 18

▶ conflictos de tierra

2012 ARRANCA CON MÁS DE CIENTO CAMPESINOS IMPUTADOS

pág. 20

▶ reforma agraria integral

EJECUTIVO INTERVIENE AL INDERT

pág. 24

CDE
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
Y ESTUDIOS

editor
CDE-Área Sociogremial

responsable
Quintín Riquelme

consejo de redacción
Quintín Riquelme
Elsy Vera
Justino Romero

foto de tapa
Archivo CDE

fuentes consultadas
ABC Color y Última Hora

diseño, diagramación
e impresión
Gisela Parodij Estudio de
Diseño | Tel.: (021) 281855

La edición de esta revista se realiza gracias a:

CAFOD
just one world

El contenido es de responsabilidad exclusiva de los/as autores/as y no compromete a la institución que colabora en su elaboración y publicación.

conflicto de ñacunday,

PRESAGIA CONTINUIDAD DE LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL 2012



Los primeros tres meses del año 2012 posiciona al campo como el principal escenario de las luchas sociales. Como es ya costumbre, el foco del conflicto es la tierra y de esta a su vez el caso Ñacunday es el más importante, donde la Liga Nacional de Carperos continúa presionando por la recuperación de unas 12 mil hectáreas que para la organización de sin tierras son excedentes fiscales pero en poder de los brasiguayos productores de soja.

La intervención del gobierno para buscar soluciones y sobre todo evitar el desalojo violento, generó diversas reacciones por parte de las organizaciones campesinas y el sector empresarial. Lógicamente este último rechazó esta acción tildando al propio gobierno de “orquestrar la invasión de propiedad al facilitar los camiones del Ejército para los carperos”, según expresiones del El Ing. Hermes Aquino, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), refiriéndose al traslado de carperos a las tierras del Parque Nacional Ñacunday. Este acuerdo entre carperos y el gobierno sienta un precedente pues como es sabido ningún gobierno ha distribuido tierras y las conquistas de

asentamientos campesinos se dieron por medio de ocupaciones.

En el momento en que la situación estaba candente en la zona, el gobierno recurre a la Ley 2.352/05 conocida como Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. Esta ley en su Art. 1º expresa: Se establece zona de seguridad fronteriza la franja de 50 kms adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional. Art. 2º: Salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza, los extranjeros oriundos de

cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República, no podrán ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales.

El reflotamiento de esta ley levanta el avispero en el seno del gremio sojero, que se lanza con toda su fuerza contra el intento del Poder Ejecutivo de recurrir a esta Ley. Si bien la medida tomada por el gobierno no implicaba la expulsión de los brasiguayos de sus actuales ocupaciones, sino la regularización de las tierras, la misma fue interpretada por éstos y por el gremio soje-

ro, como un intento de amedrentamiento a los llamados productores y un explícito respaldo a los carperos. La medida, sin embargo, no tuvo efecto por la intervención de la justicia a favor de los brasiguayos y contra la intención de los carperos de recuperar esas tierras.

El descubrimiento de irregularidades en la adjudicación de tierras, entre otros, motivó la intervención del INDERT por parte del Ejecutivo, con el propósito de iniciar un supuesto proceso de reorganización institucional. Sin embargo se plantea la duda si verdaderamente el Ejecutivo tendrá la capacidad real de sostener la reestructuración del ente agrario, tendiendo en cuenta su complejidad y sus años de esclerosis institucional. Con esta acción el gobierno admite que las sucesivas administraciones no han encontrado la fórmula adecuada para solucionar el problema de la mala distribución de la tierra. Tras las publicaciones de un medio de prensa sobre las supuestas irregularidades detectadas en el INDERT, los últimos ex titulares Alberto Alderete y Eugenio Alonso, expresaron su opinión al respecto. Ambos coincidieron en que la institución agraria no tiene el poder suficiente para cambiar el problema de la tenencia de la tierra en nuestro país. De esta manera expresaron su total incredulidad hacia las acciones del gobierno para depurar la institución.

Esta iniciativa por mejorar el funcionamiento adecuado del INDERT tiene, sin embargo, el visto bueno de algunas organizaciones campesinas, en especial el de la Coordinadora de Recuperación de Tierras Malhabidas, que exige mayor celeridad en el proceso de recuperación de dichas tierras. En estos tres años, lo poco que pudo avanzar el gobierno de Lugo hacia la Reforma Agraria se vio opacado por las necesidades inmediatas que hay en el campo, que no puede seguir esperando las reestructuraciones orgánicas del aparato estatal.

La otra acción importante es la décimo novena movilización campesina organizada por la Federación Nacional Campesina (FNC). Unas 5 mil personas llegaron a Asunción de diversos departamentos del país, exigiendo una serie de reclamos, algunos de los cuales son históricos como la eliminación de los latifun-

dios, la asistencia técnica y crediticia para la producción y mayor presupuesto para salud y educación. Esta movilización realizada por la FNC campesina es en el marco de la recordación de la primera gran movilización campesina en Asunción en el año 1994, en la cual unas 25.000 campesinos y campesinas llegaron a la capital despertando el asombro de la gente. Desde entonces, todos los años se replica esa gran movilización.

En síntesis, a casi cuatro años de gobierno, la reforma agraria prometida pero no concretada, provoca la arremetida de las organizaciones de sin tierras que ante la nula posibilidad de acceso legal a la tierra, recurren al mecanismo que ha sido el más efectivo para la adjudicación de tierras, la ocupación de las grandes propiedades, especialmente aquellas sospechadas de excedentes fiscales y mal habidas.



pequeños avances

FRENTE A HISTÓRICAS DEMANDAS

La institución responsable en la distribución de tierra está atravesando por una crisis interna que se desencadenó en una intervención por parte del Ejecutivo. Para conocer más de cerca este proceso, dialogamos con Beatriz Ferreira, funcionaria del INDERT quien opina sobre la situación agraria en Paraguay. La misma puntualizó los principales obstáculos que atraviesa el ente agrario para desempeñar la difícil labor de asistir a las familias campesinas. Así también resaltó algunos lineamientos que fueron incorporados en este gobierno y los principales desafíos que deberá afrontar para la próxima administración que asuma en el 2013.

¿CÓMO VE EL CONFLICTO AGRARIO EN PARAGUAY? ¿POR QUÉ NO SE PUDO CREAR ASENTAMIENTOS NUEVOS DURANTE ESTE GOBIERNO?

Creo que estamos todavía en lo mismo, somos el país latinoamericano con más inequidad en cuanto a la distribución de tierras y por lo tanto también tenemos una inequidad social enorme. Es una cuestión histórica que se fue acumulando, hoy en día se está perdiendo la política de la producción para la auto sustentación de la familia. El Estado no tiene una política que apunte fuertemente a defender los derechos de las personas a producir su propio alimento, sino más bien está la política de la producción del agro negocio que avanza muy fuertemente. Se sabe muy bien que en la última década el Estado paraguayo ha perdido el 50% de las tierras

que han comprado y que éstas propiedades perdidas pasaron a engrosar otra vez las propiedades de los empresarios del agro negocio, porque el cultivo de la soja está avanzando sobre las colonias y los asentamientos del INDERT. También se sabe que con el cultivo de la soja viene todo un paquete tecnológico que lleva al uso de los productos químicos. Si bien es cierto en estos últimos años, prácticamente en el 2011 se creó el Programa de Producción de Alimentos (PPA) desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería que justamente apunta a fortalecer otra vez la estructura productiva de alimento de la familia y poner también en primer plano la producción de alimentos.

Una tarea pendiente es realizar un ordenamiento interno, tener un registro ágil, para un saneamiento de sus colonias

pero también tiene que trabajar mucho a nivel interno para modernizar la institución. Se ha perdido mucho la ética profesional del funcionariado en el país y el INDERT administra tierra, que es un capital deseado en todo el mundo, entonces se necesita profesionalizar y tener funcionarios profesionales con mucha ética en primer lugar. El INDERT no ha contado tampoco con los recursos necesarios como vehículos, las oficinas no están equipadas con equipos informáticos, ciertamente se fueron mejorando en este sentido. Ciertamente se trató de hacer y se hizo pero no es suficiente porque aquí hay que tener un catastro propio que pueda mostrar dónde están esas propiedades del Instituto, en qué situación están y cómo están las familias en esos lugares. Se necesita el saneamiento y el ordenamiento de sus propias tierras. Si bien



este gobierno apuntó mucho a regularizar las tierras expropiadas y se avanzó poco a crear nuevos asentamientos, esa es una opinión personal mía, este es el primer año que tuvo un aumento presupuestario y cada año las tierras se van revalorizando, a esto se suma la burocracia tremenda ya que debe comprar por medio de licitación pública. También el Parlamento ha sido una de las dificultades para la compra de tierras. No se ha presentado tampoco proyectos de ley de expropiación de tierras, conociendo que no iba a correr y que no se iba a tener los votos. Esa es una herramienta para dar acceso

a tierra que en este gobierno se dejó de utilizar, o sea que no se pudo aplicar la expropiación de latifundios, hay muchas cosas de lo que hizo pero que es pequeño en comparación a las grandes necesidades que hay.

Creo que también el hecho de que no se haya tenido un plan de consenso entre todos los sectores también dificultó la implementación del plan del Instituto. En el INDERT hubo demasiados cambios en todos los niveles y eso no ayudó mucho para que la política implementada tenga su continuidad, pues cada cambio lleva su tiempo. Tam-

co hubo un acompañamiento eficiente para el arraigo de las familias asentadas y no hubo una política clara más allá de insertarlo a esta familia verdaderamente a la economía nacional. Entonces la gente estaba aislada, abandonada y en esas circunstancias es muy difícil realmente que se desarrollen. Nosotros muy claramente vemos que por eso se creó la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA).

Esta propuesta fue una intervención coordinada y articulada de las demás instituciones con el fin de dotar a los asentamientos y colonias

de las infraestructuras de los servicios básicos que permitieran desarrollarse. Y bueno ahí hubo más bien problemas de liderazgos principalmente, como el gobierno de Fernando Lugo está integrado por diferentes partidos políticos, por ahí con diferencias, entonces esa parte no se pudo consensuar. Es decir, que todos los ministerios puedan responder de igual medida y darle el interés necesario. Pero no obstante creo que se implementó esta política, funcionó como enlace para trabajar con los asentamientos rurales que tienen su propio presupuesto como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, está también SENA-SA, SENAVITAT, entre otros. Todavía tenemos esa cultura muy clientelista, eso a nivel político está muy arraigado, y también a nivel de las organizaciones sociales. Lo que se ha hecho posiblemente es poco con las inmensas necesidades que hay, que fueron acumulándose durante años en las colonias y los asentamientos que se han creado.

¿QUÉ OPINA DE LA INTERVENCIÓN DEL INDERT POR PARTE DEL EJECUTIVO?

La intervención según mi opinión personal no fue oportuna. Esa tarea se tenía que haber hecho al asumir Fernando Lugo el gobierno para acompañar justamente el fortalecimiento institucional interno del INDERT. Esta intervención obstaculiza los procesos normales que se venían haciendo. Fue más bien darle elementos a los medios de comunicación que en realidad son los que fijan la agenda

por donde hay que caminar. Creo que no para mí no fue oportuna y más que fortalecer creo que debilita al INDERT. Si el ingeniero Barreto estaba incurriendo en algún procedimiento administrativo dudoso, el presidente tenía toda la potestad de cambiarlo y corregir eso que debería realizar desde sus inicios para apuntar a un proceso de fortalecimiento del Instituto. Creo que el gobierno 2008-2013, que va a terminar sin que haya realizado esas acciones, si bien es cierto creo que por lo menos hay una cuestión de más participación. Anteriormente los funcionarios eran todos de un solo sector, de un solo color, hoy día un poquito eso cambió. Al interno hay una lucha feroz de los antiguos contra los nuevos. Es necesario trabajar mucho más en el proceso de institucionalizar antes que de una cuestión personalista que cree que tiene que ser así y no desarrollando políticas públicas realmente, esa puja todavía es muy fuerte.

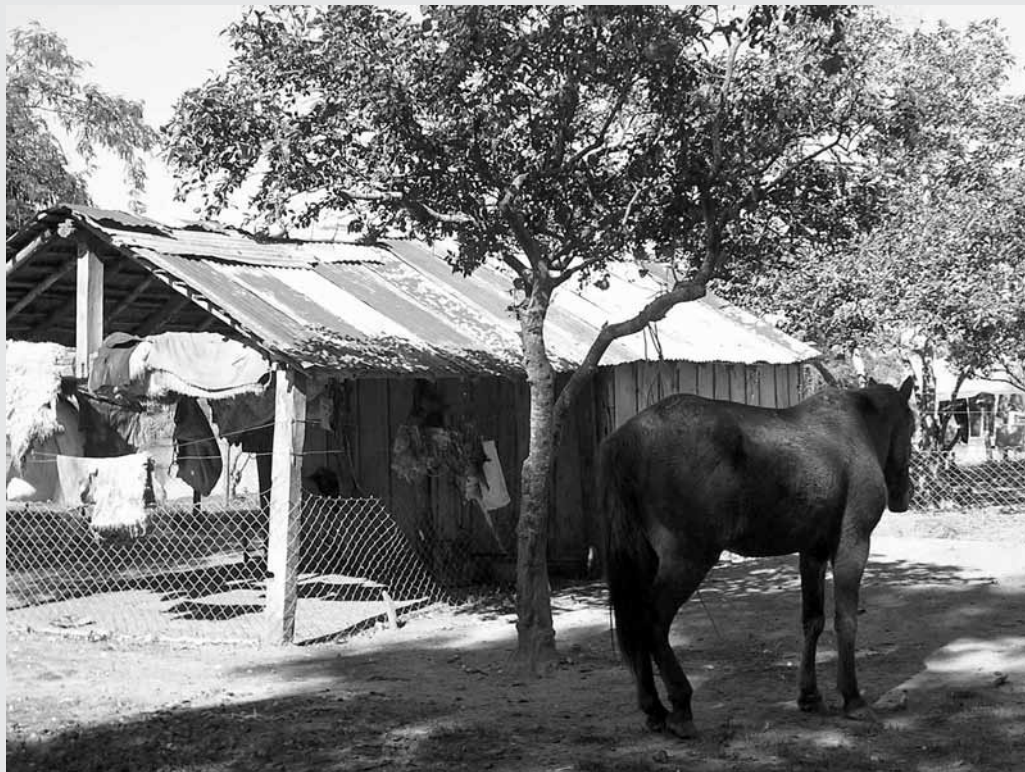
¿POR QUÉ CREE QUE LA CRISIS EN EL CAMPO SE VA AGUDIZANDO?

Sabemos que hay tierras cuyo propietario no tiene la legitimidad de la gente, la comisión de Verdad y Justicia hizo un trabajo que fue publicado y es conocido por las organizaciones sociales. Entonces ahí hay una tensión, entre las organizaciones sociales y los detentadores de estas tierras, por lo cual las organizaciones sociales reclaman esas tierras porque ven que los dueños han obtenido esas tierras por medios ilegales, violando leyes. Entonces por otro lado

los propietarios no reconocen eso. Nosotros también hemos hecho equipos de trabajos interinstitucional para analizar esto.

La Procuraduría General del Estado ha estado emprendiendo algunos juicios para recuperar esas tierras y ahí nos vamos a topetar con el Poder Judicial. Por ejemplo el litigio judicial del caso de las tierras de Adelmario Rickli que falló a favor de Rickli y el Estado pierde ese juicio. En ese sentido, vemos que el Poder Ejecutivo o el INDERT necesita tener informaciones sólidas sobre sus propias tierras, sobre sus colonias, para poder crear una mesa intersectorial para tratar este tema. Ese es otro tema que hay que sortear porque si hay una base de ilegalidad que un sector importante de la población paraguaya cuestiona, entonces es difícil que haya paz y eso se tiene que solucionar. Nosotros creemos que hay que hacer una mesa intersectorial para tratar este tema porque los juicios pueden tardar años y el Estado puede perder esos juicios. Se tiene que debatir esos temas más bien pero en forma intersectorial porque son decisiones grandes que necesitan la participación de todos los sectores y a eso tampoco pudimos llegar. Son algunas tareas que se iniciaron pero que no llegaron a culminarse.

Las tensiones se elevan como el caso Nacunday sin poder darle una salida porque en realidad las vías judiciales llevarían años, esas son las cosas que creo que fueron elevando. Por otro lado se ha



hecho también trabajo con la gente en el campo, por lo menos hay presencia del técnico pero hay que mejorarlo con direccionamientos políticos para fortalecer la agricultura familiar campesina. Esta tarea es del Estado en su conjunto, no solo del INDERT pero para eso se necesita elaborar políticas públicas.

SI TUVIERA QUE REALIZAR UN BALANCE DE LA GESTIÓN DEL INDERT ¿CÓMO LLEGA LA INSTITUCIÓN AL 2013 ANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO?

Para este gobierno prácticamente está terminando el

tiempo, pero de todas maneras las actividades están planeadas en todas las instituciones y se harán con la celeridad que requiere dar respuesta a la gente en el campo, sobre todo en algunas necesidades muy sentidas como la electrificación, agua potable, educación y salud pública. Creo que el INDERT necesita un apoyo por un tiempo importante de algún equipo aunque sea externo para iniciar un proceso de aprendizaje de todo lo que se ha hecho antes en cuanto a habilitación de asentamientos, titulación e incorporar correctivos. Sabemos que la inequidad en la extensión de

la tierra sigue desde hace 100 años y que la gente sigue dejando el campo, migrando interna y externamente porque no encuentra una solución en sus lugares.

intervención en Ñacunday

CAUSA VARIAS REACCIONES

El conflicto de Ñacunday sigue desatando diferentes reacciones en la sociedad y dentro de las propias organizaciones campesinas. En ese sentido, la FNC criticó fuertemente la injerencia del gobierno en la zona de Alto Paraná, mientras que el MCP y la OLT se mostraron a favor de la intervención para encaminar una solución al conflicto que lleva varios meses. Este caso y otros puso al descubierto numerosas irregularidades dentro del INDERT relacionado a la distribución de la tierra, en este punto la MCNOC se pronunció pidiendo la inmediata intervención del ente agrario. Por su parte, la Liga Nacional de Carperos aceptó la propuesta del gobierno de trasladarse provisionalmente en el Parque Nacional Ñacunday, propiedad del Estado, mientras se solucione judicialmente el problema de la tenencia de las tierras en la zona. Por otra parte, los carperos aseguraron que hay mucha presión sobre los sin tierras y reconocieron la existencia de conflictos internos.

LIGA NACIONAL DE CARPEROS (LNC)

Victoriano López, dirigente de la LNC, acusó de violentos a los propietarios de tierras. También señaló que dicha actitud es apañada por la Policía Nacional. "Estamos avasallados por Brasil y queremos saber qué pasa", dijo para asegurar que los propietarios de tierra actúan con una violencia tal que hace temer por sus vidas a los campesinos. Los enfrentamientos entre carperos y colonos se vienen agudizando especialmente en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. UH 23.01.12.

Los carperos aceptaron la propuesta del Gobierno de abandonar provisoriamente la zona donde están instalados los campamentos, hasta tanto se solucione en los estrados judiciales el problema de la tenencia de tierras en Ñacunday. El dirigente de los carperos, José Rodríguez

aceptó levantar las carpas ubicadas frente a la estancia El Espigón, propiedad del sojero brasileño Tranquilo Favero, y otras instaladas bajo la línea de alta tensión de la ANDE. La propuesta fue instalarse a unos cinco kilómetros del actual lugar, en una zona conocida como Bolsa 45, dentro del Parque Nacional Ñacunday, que es tierra del Estado. El Ministro del Interior, Carlos Filizzola, el gobernador de San Pedro, José Ledesma, el procurador General de la República, Enrique García, y el asesor Jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho, se reunieron con el dirigente campesino para brindarle la propuesta y así evitar que se produzca el desalojo con violencia. Se estima que cerca del 80% de los más de 10.000 ocupantes ya fue reubicado. UH 25.02.12 Política.

José Rodríguez, líder de la LNC, reconoció que existe mucha presión sobre los sin

tierras que acampan en el Parque Nacional Ñacunday. "Las presiones vienen de la prensa, de los ambientalistas, de los sojeros y el riesgo de desalojos en caso de que el lugar sea de Favero o del Parque Nacional de Ñacunday y los problemas internos que estamos teniendo", afirmó el dirigente de los sin tierras. Rodríguez reconoció que el conflicto interno (con Victoriano López) "no se pudo solucionar con el diálogo y que existe gente que está recurriendo a otra agenda que no corresponde a la lucha de recuperar la soberanía, sino que busca crear un clima de confrontación entre campesinos y el Gobierno, a través de un enfrentamiento con las fuerzas represivas que va a venir en caso de que se ordene un desalojo". La Liga Nacional de Carperos trajo a varias comisiones vecinales para adherirse a la lucha por la tierra en Ñacunday como la comisión vecinal Santa Lucía, que integran unas 300 familias

para hacer masa, pero con el conflicto interno la mayoría ya abandonó el lugar, según Rodríguez. UH 25.03.12 Política.

MOVIMIENTO CAMPESINO PARAGUAYO (MCP)

Los sectores campesinos están conformes con el trabajo que está llevando adelante el Gobierno en la zona de Ñacunday. Belarmino Balbuena, referente del MCP, sostuvo que los dueños de las tierras deberían estar contentos porque una institución se ocupa de transparentar la situación. Está a favor de la mensura y alegó que el problema es herencia de la dictadura colorada. "Los propietarios tienen que estar tranquilos porque van a saber cuántas hectáreas poseen y van a tener su título al día", manifestó. UH 25.01.12 Política.

ORGANIZACIÓN DE LUCHA POR LA TIERRA (OLT)

La dirigencia de la OLT se pronunció a favor de la intervención estatal en la zona de Ñacunday. En ese sentido, el líder Miguel Ángel Moreira, se declaró a favor de la mensura para que se den las tierras a los verdaderos beneficiarios de la Reforma Agraria. Sostuvo que la derecha siempre privilegió a los sojeros y aseguró que existen tierras malhabidas. Señaló que hay temor de los supuestos propietarios porque no tienen en regla sus papeles y por eso recurren a amenazas como el juicio político contra el presidente Fernando Lugo, en alusión a los productores. Manifestó que acompañan la lucha por las tierras. UH 25.01.12 Política.

MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS (MCNOC)

El dirigente de la MCNOC, Luis Aguayo, pidió en forma urgente una cumbre de todos los poderes del Estado para zanjar la crisis instalada en la zona de Ñacunday y buscar mecanismos legales y constitucionales para la obtención de tierras. Aguayo se ratificó en que la única solución para el problema que aqueja a más de 350.000 familias campesinas del país es la Reforma Agraria. Manifestó que detrás de las ocupaciones a propiedades privadas por parte de los carperos existe un gran interés político. Lamentó que líderes como Victoriano López manchen y desacrediten la lucha campesina, especialmente ofendan la dignidad de las mujeres. El dirigente de la MCNOC dijo que apoyan toda iniciativa de compatriotas que luchan por la tierra, pero solo por la vía correspondiente; es decir, a través de la Reforma Agraria Integral. Mientras los carperos continúan instalados en la zona de Ñacunday aguardando una respuesta del Gobierno y amenazando con nuevas ocupaciones. UH 04.02.12 Política.

La MCNOC emitió un comunicado donde reafirma el acompañamiento al Gobierno, en su intención de realizar una mensura judicial en Itapúa. Señaló además que en un país serio e institucionalmente organizado se debe tener la Ley de Frontera, para precautelar la soberanía nacional. El documento sostuvo que el único instrumento legal, para determinar la delimitación de las propiedades con base en los

títulos, es la mensura judicial. Según la MCNOC, se intentan ocultar los datos para que nunca se demuestre la apropiación en forma malhabida de los principales recursos estratégicos del país. "Históricamente es la corrupción más escandalosa en donde funciona todo tipo de mafia, en síntesis, toda la frontera del país se convierte en una cueva de mafia de todo tipo", refirió. Por último, exige al Gobierno la intervención patriótica, utilizando todo el poder constitucional que tenga a su alcance para avanzar hacia la regularización de todas las tierras públicas. Según la MCNOC, esta situación es el origen de toda la violencia y criminalización de la lucha social por parte de aquellos que defienden la ilegalidad. UH 15.02.12 Política.

La MCNOC realizó una plenaria en la que decidió solicitar y apoyar la rápida intervención del INDERT, por supuestos hechos de corrupción. Al respecto, el dirigente Luis Aguayo señaló que con este mecanismo se buscará transparentar la institución. Aguayo mencionó que la administración de Marciano Barreto al frente del INDERT incurrió en una serie de hechos de corrupción, por lo que urge al Ejecutivo llevar adelante la intervención. UH 25.02.12 Política.

FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA (FNC)

Marcial Gómez, Secretario General adjunto de la FNC, señaló que existen intereses políticos detrás de las ocupaciones realizadas por los carperos en Ñacunday. El dirigente aseguró que al es-

timular el movimiento de los carperos, el Gobierno también busca distraer su propia incapacidad y falta de voluntad política para iniciar una Reforma Agraria. Según Gómez, en nombre de la lucha por la tierra, ya desde la campaña electoral anterior, quienes hoy están en el poder propiciaron la instalación de carpas en departamentos como San Pedro. Gómez sostuvo que casos como el de Teixeira y ahora Ñacunday son "una cuestión montada intencionalmente desde el Gobierno" para distraer la atención de problemas de fondo, como la necesidad no atendida de desarrollar los asentamientos y promover la producción. Con casos así, insiste, se ocultan todos los compromisos asumidos por las autoridades actuales con respecto a la Reforma Agraria. Es además una muestra de que lo que persigue la actual administración que encabeza Fernando Lugo, que es promover una política asistencialista. "Con este afán, hicieron resurgir a gente muy vinculada a grupos políticos del momento, e incluso hacer resaltar nuevas figuras como dirigentes campesinos, cuando en realidad no lo son. Evidentemente, manipulan la miseria de la gente", resaltó Gómez. UH 04.03.12 Política.

La declaración de emergencia alimentaria del presidente Fernando Lugo, por la fuerte sequía, finalmente resultó ser una "absoluta farsa", según la FNC. La denuncia fue realizada por Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina. La declaración de emergencia se firmó el 17 de enero pasado.

Están a punto de cumplirse 90 días (tiempo establecido para ayudar a las familias campesinas perjudicadas por la sequía), pero el MAG solo distribuyó las bolsas de semillas a un sector del campesinado, según la queja realizada por la lideresa campesina. Señaló que el problema principal es que las semillas que entregaron no servirán, porque, de acuerdo al pronóstico, el periodo de helada llegará en poco tiempo (se estima entre junio y julio). Agregó que recién hace unos 15 a 30 días que entregaron las semillas de parte del MAG. Teodolina señaló que fue una mera propaganda la declaración de emergencia, para justificarse ante los campesinos que reclamaron la asistencia del Estado. Sostuvo que, a criterio de la FNC, la única manera en que el Estado puede ayudar a los campesinos a generar producción es brindar una verdadera ayuda durante seis meses de trabajo para lograr resultados. La asistencia de la declaración de emergencia quedó a cargo del MAG. Este debía brindar ayuda con el respaldo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que debía entregar kits de alimentos. Sin embargo, el problema surge debido a que el ministro Enzo Cardozo ni siquiera dio a conocer el lista de familias que debían ser beneficiarias. Teodolina apuntó que el ministerio ni siquiera elabora el listado de personas para un trabajo coordinado y controlado. Llamativamente, se menciona que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá tenían que desembolsar la suma de dinero, pero hasta el momento no se efectivizó. UH 26.03.12 Política.

ASOCIACIÓN CAMPESINA SAN ISIDRO DEL JEJÚ

El padre Braulio Maciel, representante de la Asociación Campesina San Isidro del Jejuí, que nuclea a las familias descendientes de los campesinos que formaban parte de las recordadas Ligas Agrarias, se presentó ante el titular del INDERT, Ing. Marciano Barreto, para pedir la celeridad en la titulación de las tierras que son producto de 41 años de lucha. El pedido obedece a que el padre Braulio quiere que los títulos sean entregados a las 29 familias campesinas, al cumplirse un aniversario más de la fatídica represión stronista que se dio en los 70. El Ing. Barreto explicó que todavía están en trámite en la Dirección de Catastro y la Dirección de Registros Públicos, pero prometió entregar durante el mes de febrero. ABC 06.02.12 Economía/UH 07.02.12 Política.

Regionales

MISIONES

MESA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE MISIONES (MCDOCM)

Dirigentes de la MCDOCM del asentamiento Guayaki del distrito de San Igancio, denunciaron ante la fiscalía el incumplimiento de una resolución del INDERT. Mediante dicha resolución, el presidente del INDERT, Marciano Barreto, ordenó el loteamiento para unas 61 familias. Sin embargo, otro grupo de campesinos utiliza el predio como campo comunal. Según la resolución



de Barreto, emitida el 29 de diciembre de 2011, el NDERT pide respetar la superficie loteada y destinar para asentamiento humano, a los afiliados de la MCDOCM, conforme a la nómina, constituida mediante el censo del 21 de junio del año 2011. El INDERT, además, determinó deslindar una superficie de 200 hectáreas para campo comunal a ser ubicado al sur del loteamiento en la superficie libre del asentamiento Guayaki. Un grupo de campesinos usa el sector denominado Playo como campo comunal e impide a las familias adjudicadas, miembros del MCDOCM, ocupar los lotes. Por su parte, Justino Morínigo, director departamental de INDERT señaló que el ente agrario no reconoce ninguna ocupación, "por lo tanto, deberán desalojar los lotes inmediatamente", indicó Morínigo. ABC 02.02.12 Interior.

ITAPÚA

Las diferentes comisiones y asociaciones de campesinos del Departamento de Itapúa pidieron a Emilio Camacho, interventor del INDERT, que se realice la mensura judicial en la zona. Esto permitirá la distribución equitativa de tierras malhabidas, que según los labriegos existen en gran cantidad en la región. Los campesinos denunciaron que autoridades de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el gobernador de Itapúa, Juan Afara, están detrás de la suspensión de la mensura iniciada por el INDERT en el departamento. "Ellos pusieron todo un aparato para que no salga la mensura", recalcaron. Anunciaron que solicitarán que se apele la decisión de un juez que desestimó el pedido judicial. "En nuestro país las tierras se acumulan en manos de pocas personas. Eso dejó como

consecuencia que mucha gente del sector esté sufriendo en el campo. Exigimos una solución definitiva al Gobierno", señaló Daniel Duarte, dirigente campesino del nordeste de Itapúa. "Lo que pedimos es que todas las mensuras judiciales pedidas por el organismo de aplicación se cumplan. No se tiene un catastro para saber cuántas hectáreas cuentan con títulos y cuántas no los tienen, y son poseídas de forma irregular", dijo Duarte. El principal referente del campesinado en el Departamento de Itapúa aseguró que el sector es respetuoso de las leyes, pero que va a acudir a la Justicia para reivindicar situaciones irregulares que deben ser corregidas a la brevedad posible. Camacho escuchó los reclamos e informó que el mandato presidencial, en el marco de la intervención del INDERT, es de la estricta legalidad, respeto a la propiedad privada y trabajo por la Reforma Agraria. UH 04.03.12 Política.

fnc clama por SEGURO AGRÍCOLA EN SU XIX MARCHA



Los reclamos de salud, educación, mejores precios para los productos y el seguro agrícola se hicieron sentir en Asunción durante la XIX marcha campesina. La movilización, convocada por la Federación Nacional Campesina (FNC), congregó a más de 3.500 labriegos que recorrieron varias arterias capitalinas desde el ex-Seminario Metropolitano hasta las plazas del Congreso. La dirigencia de la Federación criticó fuertemente al gobierno y lo calificó de ejercer una política de mendicidad y asistencialismo que genera mayor pobreza. La FNC viene realizando diversas movilizaciones en distintos puntos del país en reclamo de una asistencia estatal para mitigar los daños que la sequía produjo a los pequeños/as productores/as.

Un grupo de pobladores de la compañía Costa Irala, de Quiindy (Paraguari) se manifestó en el local del INDERT, para reclamar derechos sobre parte del campo comunal. Se trata de una fracción de terreno que abarca 50 hectáreas, la que por dictamen de la institución citada anteriormente fue titulada a nombre de Gustavo Dos Santos Ros. Los lugareños alegan que en la central del INDERT fraguaron un excedente de las 912 hectáreas que tiene la propiedad vecinal para beneficiar a dicha persona. Los manifestantes fueron recibidos por la directora re-

gional del INDERT, Prof. Carolina Barrios, quien exhibió a los representantes del campo comunal un documento en el que consta que Dos Santos Ros es propietario de dicha fracción de tierra, dividida en cuatro fincas. Ante esta situación, los manifestantes se retiraron de la oficina regional del INDERT con la promesa de que no permitirán que el supuesto dueño del excedente ingrese a la finca en litigio. Los lugareños argumentaron que las 912 hectáreas del campo comunal nunca tuvieron un sobrante, desde su habilitación, el 6 de junio de 1974. La propiedad se halla inscrita en el Registro Público N° 4226, del 13 de noviembre de 1995, según documentos que presentaron. ABC 11.02.12 Interior.

Unas 400 personas cerraron la ruta 6 a la altura del kilómetro 103, en la compañía denominada Pirapey 40, departamento de Itapúa. Los mismos reclamaron el esclarecimiento de excedentes fiscales. Autoridades del Frente Guasu, la mayoría del distrito de Yatytay (Itapúa) y campesinos de distintas compañías vecinas se manifestaron en el sitio en apoyo a las acciones impulsadas desde el Gobierno, relacionadas a la aplicación de la franja de seguridad fronteriza en el territorio nacional, como instrumento que garantiza la soberanía nacional. Exigieron además la implementación de la mensura judicial como elemento fundamental que garantice la Reforma Agraria Integral. Los campesinos llegaron desde distintos distritos vecinos, como San Rafael del Paraná, Otaño, Tomás Romero Perei-

ra, Edelira, Itapúa Poty, entre otros. UH 15.02.12 Política.

Integrantes de la FNC, ocuparon la Plaza Libertad de Villarrica, Guairá. La medida forma parte de las manifestaciones realizadas por esta organización en distintos puntos del país, reclamando la asistencia del Gobierno debido al perjuicio ocasionado por la sequía. Néstor Darío Jara, dirigente de la FNC en la zona del cuarto Departamento, aseguró que el 80% de la producción de distintos rubros fue perjudicado. "Necesitamos con urgencia la asistencia del Gobierno nacional para salir adelante", indicó el dirigente. Puso como ejemplo el algodón, que de 1.200 kilos por hectárea ahora solo podrán cosechar 200 kilos. En el caso del maíz, un 90% quedó arruinado, y el maní, un 60%, según los datos proporcionados por Jara. Indica que los cultivos de poroto y yerba mate fueron perjudicados en menor medida. Tampoco dejó de mencionar la caña de azúcar, que fue dañada en un 30 %, de acuerdo a lo manifestado por el dirigente campesino. La dirigencia de la FNC, que opera en el Departamento del Guairá, considera impostergable la asistencia del Gobierno nacional para que los agricultores puedan salir adelante tras el problema planteado. "Si el Gobierno no nos asiste, hasta podemos pasar hambre", resaltó Néstor Darío Jara y agregó que las autoridades no pueden evadir esta asistencia, porque la economía se basa en la agricultura. UH 15.02.12 Metropolitana-Interior.

En el marco de conmemoración del día de la Mujer Pa-

raguaya, el Equipo Mujer del Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurã (MPRPP) entregó alimentos que se cultivan en el campo a los niños, niñas, mujeres y hombres pobres que están en los alrededores de la zona capitalina. La dirigente Dora Flecha dijo que es en recordación a esas mujeres de la Guerra del 70 que tuvieron una participación activa durante la contienda y al finalizar la misma. La actividad se viene realizando cada año en homenaje a las mujeres luchadoras de la Guerra del 70, y en homenaje a las mujeres pobres que luchan hoy diariamente contra la pobreza y la discriminación, encabezada por el Departamento Mujer de Paraguay Pyahurã, y coorganizada con la Secretaría de la Mujer de la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Equipo Mujer de la Corriente Sindical Clasista (CSC). "Este gobierno de turno, como los gobiernos anteriores, prometió durante su campaña electoral la reforma agraria y eso no ha sucedido todavía. El campesinado aún siguen luchando por la falta de tierras, la falta de trabajos, el acceso a la educación, el acceso a la salud", recalcó la dirigente Dora Flecha. "Las mujeres aparentemente somos personas de segunda categoría y no es así. Las mujeres somos importantes porque podemos hacer mucho por nuestro país y por eso recordamos a las mujeres de la Guerra del 70, en la que tuvieron una participación activa. Ellas también levantaron nuestro país después de la guerra. Trabajaron en la chacra, en las fábricas. Y nosotras reivindicamos nues-



tros derechos y mantenemos en alto la bandera de la lucha. Sabemos que no tenemos otra alternativa sino que organizarnos para ir conquistando los derechos que tenemos las mujeres y los sectores pobres”, puntualizó Flecha. ABC 18.02.12 Locales.

Un grupo de 70 pequeños productores y acopiadores de algodón se reunieron frente a la desmotadora de la empresa Arasy Orgánica SA, ubicada en la ciudad de Horqueta (Concepción), para manifestar su descontento por el bajo precio que se pretende pagar por cada kilogramo del producto. En la oportunidad reclamaron a la empresa el pago de 3.500 guaraníes por cada kilo de algodón. Los productores señalaron que el mismo Gobierno ha promocionado el cultivo del algodón y aho-

ra tiene la obligación de intermediar para que el precio aumente. Los manifestantes indicaron que si no hay solución, saldrán a la ruta para una medida más fuerte. Por su parte, Jorge Campo, administrador de la empresa Arasy Orgánico SA, señaló que ya elevó de inmediato una nota a los directivos presentando los reclamos. Indicó que, según él entiende, el precio internacional no da para alzar la cotización a nivel nacional.

UH 22.02.12 Economía.

Productores de algodón de Santa Rosa (Misiones), se movilizaron frente a la filial de una de las desmotadoras, en reclamo de mejores precios y realizaron cortes intermitentes de la ruta I, Mcal. López. Para buscar una salida al reclamo de los productores, llegó al lugar Juan García Miró,

director de la Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera (DEAG) en representación del ministro de Agricultura, Enzo Cardozo, y les propuso entregarles kits de víveres y prometió tratar de convencer a acopiadoras y empresas proveedoras de semillas para llegar a un acuerdo por las deudas. Propuso además conversar con los responsables del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras entidades bancarias privadas para buscar refinanciación de deudas. Los algodoneros no aceptaron las propuestas de García y anunciaron que continuarán con la medida de fuerza impuesta. Los productores pidieron que el precio por cada kilo de algodón sea de 4.000 guaraníes, y no los 2.600 actuales. A consecuencia de la sequía, el ren-

dimiento es de apenas 300 a 400 kilogramos por hectárea. En algunos casos solo se llegó hasta 100 kilogramos por hectárea, según señala uno de los productores. Los algodoneros, manifestaron que no se retirarán de la ruta hasta que consigan su objetivo. ABC 23.02.12 Economía.

Durante una movilización en Asunción, un grupo de organizaciones campesinas y sectores de derechos humanos que conforman la Coordinadora por la Recuperación de Tierras Mal Habidas pidió la destitución del procurador general, Enrique García, y la intervención, además del INDERT, de la Dirección de Catastro y Registros Públicos. El punto de concentración fue la Plaza Uruguaya, desde donde el grupo marchó hasta la sede

de la Procuraduría General de la República. Encabezaron la marcha los dirigentes campesinos Luis Aguayo y Elvio Benítez, quienes defendieron la lucha por la recuperación de las tierras y el proceso de intervención del INDERT. Benítez acusó a los poderes Legislativo y Judicial de trabar el proceso. “Hasta este momento no se sacó ni un proyecto de expropiación. Desde el Poder Legislativo nunca se denunció la existencia de tierras mal habidas, que hubo corrupción en anteriores gobiernos del Estado, y están apañando. Consideramos que es una traba para este Gobierno. Si este Gobierno va a llevar adelante la reforma agraria tienen que estar los tres poderes del Estado”, sostuvo. Por su parte, Aguayo acusó a García de ser “cómplice del robo y del sa-

queo de tierras mal habidas”. Ratificó el compromiso de la Coordinadora de luchar por la regularización de las tierras y que se entreguen a los verdaderos beneficiarios de la Reforma Agraria. UH 07.03.12 Política.

Más de 1.000 carperos intentaron sitiar la Fiscalía de Iruña (Alto Paraná), pero al ser impedidos por la policía se retiraron del lugar. Los sin tierras anunciaron que se manifestarán ante la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para pedir la destitución o la renuncia de la fiscal María del Carmen Meza. La movilización se realizó en el centro urbano del distrito de Iruña. Hubo tres detenidos por resistencia, al intentar rebasar el cordón policial. No obstante, la Fiscalía fue evacuada como



medida de seguridad. Los carperos habían anunciado que sitiarian Iruña con más de 4.000 manifestantes hasta que la fiscal renuncie o sea destituida, pero finalmente resolvieron cancelar la medida de fuerza. Los carperos de Ñacunday están molestos por la imputación de Victoriano López, por presunto abuso sexual de una niña de 13 años, por parte de la fiscal, a quien el abogado de los sin tierras José Gill López llamó "fiscal sojera" durante su intervención. UH 09.03.12 Política.

En el marco de la XIX marcha campesina, la FNC movilizó a más de 3.500 campesinos y campesinas que llegaron hasta Asunción para fundamentalmente mejor precio a los productos e insistir con el seguro agrícola para el sector. La precaria condición de vida que tienen y las necesidades que les agobian fueron exteriorizadas a través de encendidos discursos desarrollados en el espacio público. La sequía, que este año afecta los cultivos de consumo y la venta, es una de las principales preocupaciones del sector, ya que al perder las plantaciones se quedan sin sustento y sin posibilidad de generar recursos económicos para comprar semillas. Por esta razón, la dirigente de la FNC, Teodolina Villalba, recalzó la necesidad de un seguro agrícola para los pequeños productores. Este año, la tradicional marcha tuvo un fuerte protagonismo femenino, tanto a nivel dirigenal como participativo. Durante el acto central, la líder campesina Teodolina Villalba denunció que el Gobierno tiene una política de

mendicidad y de asistencialismo que quita la dignidad al campesino y genera mayor pobreza. "El Gobierno nacional está dejando en abandono a la mayoría de los asentamientos rurales, sin asistencia para la producción, sin educación, salud, ni servicios básicos que permitan impulsar el desarrollo", aseguró la nueva secretaria general de la FNC, Teodolina Villalba. Destacó que actualmente, tras la sequía exigen la creación de un fondo de garantía de la producción y de un sistema seguro agrícola para los pequeños y medianos productores, que esté basado en índices agroclimáticos. Por su parte, Ermo Rodríguez, habló en representación de la Corriente Sindical Clasista y señala que la FNC asume como un desafío la lucha contra los latifundios, porque este es un grave problema que impide la Reforma Agraria y el progreso de los campesinos pobres. Rodríguez, dijo que por culpa del latifundio miles de campesinos están sin tierra, pero el Gobierno no hace nada a favor de ellos. Por eso, consideró que la FNC debe remanergarse y luchar decididamente contra la concentración de las tierras en manos de unos pocos. Enfatizó que no es posible que unos cuantos tengan todo en nuestro país, como educación y salud, mientras la gran mayoría no tiene nada y padece por la carencia. Pidió política de producción a favor de los campesinos pequeños productores. ABC 30.03.12 Economía/. UH 30.03.12 País.

movilizaciones

EVITAN CULTIVO DE SOJA



Campesinos de Caaguazú y Alto Paraná se movilizaron para impedir el cultivo de soja en sus respectivas comunidades. En el caso del asentamiento San Carlos se produjo un enfrentamiento con policías que resguardaban los sojales. Por su parte, carperos asentados en la localidad de Chacore'i, anunciaron que una vez cosechada la soja, ya no permitirán que los brasiguayos cultiven las tierras, ya que ellos no son sujetos de la Reforma Agraria. Los campesinos aseguraron que el extenso sojal son tierras malhabidas y exigen al INDERT la recuperación de las mismas.

Unos 120 campesinos sin tierras ubicados en las fincas 80 y 240 de la colonia San Carlos, distrito de Mariscal López (Caaguazú) impidieron el paso de las máquinas de los colonos, imposibilitando el cultivo de soja en las tierras. Dichas fincas abarcan más de 2.400 hectáreas, den-

tro de las que se encuentra el asentamiento San Carlos. El 15 de agosto de 2008 nuevos contingentes de sin tierras ocuparon el asentamiento a fin de recuperar la soberanía territorial. Luego de cinco horas el juez de Paz, Aldo Barrios, ordenó utilizar la fuerza para despejar la ca-

lle. El jefe de Orden y Seguridad, Crio. Roberto Zotelo, quien también intervino en el conflicto, ordenó el retiro de las maquinarias, momentos en que se produjo enfrentamiento entre campesinos y los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que utilizaron balines de

goma. Los proyectiles hicieron retroceder a los campesinos y fueron detenidos cinco de ellos. Entre ellos el líder, Francisco Peralta, y el concejal municipal de Caaguazú, Juan López, acusados de incentivar a los campesinos a atacar a los efectivos policiales. El representante legal de los sojeros, Mario Vega, responsabilizó al ministro del Interior, Carlos Filizzola, por el conflicto sin fin en Mariscal López. Con palos, piedras y machetes en mano, las mujeres encabezaron el cierre de la calle y evitaron que las maquinarias de los productores sojeros pasaran.

ABC 11.01.12/19.01.12 Interior.

Un total de 120 familias de carperos, nucleados en la comisión vecinal Tape Yke, pretenden ocupar unas 400 hectáreas de tierras, en el lu-

gar denominado Chacore'i, ubicado a la altura del kilómetro 47 de la Supercarretera de Itaipú, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Los campesinos levantaron sus carpas en la cabecera de los inmuebles actualmente poseídos por Erico Carvalho Lemos y una firma denominada Agro Integración SA, quienes ya iniciaron acciones judiciales para evitar la ocupación. Frente a las fincas, donde se instalaron las precarias carpas, está ubicado el asentamiento denominado Tembiaporã. Los carperos afirmaron que una vez cosechada la soja, ya no permitirán que los brasiguayos cultiven las tierras, ya que ellos no son sujetos de la Reforma Agraria. No obstante, recibieron una notificación judicial de prohibición de innovar, en un juicio iniciado por los ac-

tuales propietarios. Según los campesinos esas tierras donde actualmente existe un extenso sojal, fueron entregadas por el INDERT a excombatientes de la Guerra del Chaco, pero que solo una familia permanece allí. Los carperos culparon al titular del INDERT, Marciano Barreto, de que la institución no tome ninguna medida para recuperar las tierras mal habidas. UH 15.01.12 Política.



2012 arranca

CON MÁS DE CIENTO CAMPESINOS IMPUTADOS



Ñacunday continúa siendo el centro del conflicto de tierras en los primeros meses del año 2012. En ese contexto se produjeron números incidentes entre carperos y colonos en la zona, como lo ocurrido en la localidad de Iruña durante el amojonamiento realizado por efectivos militares.

Los mismos pretenden ubicar unas 162.000 hectáreas de tierras en la zona del Ñacunday, distrito ubicado al sur del Alto Paraná, que correspondían a yerbales y parques nacionales hacia finales del siglo XIX, según los antecedentes. Los colonos brasileños se opusieron fuertemente a esta labor asegurando que poseen los títulos de propiedad de dichas tierras y que no permitirán que tanto militares y carperos ingresen en sus propiedades. Ante las expectativas de los sin tierras en que dichas tierras se declaren como tierras del Estado, el número de carperos fueron aumentando instalándose a la entrada de la estancia del sojero Tranquilo Favero, con la intención de juntar 20.000 personas para el día en que vence el plazo dado al Gobierno, para que defina si las tierras de Favero son o no tierras públicas, que puedan ser recuperadas y entregadas a los campesinos. Los sin tierras aseguran que Favero vendió tierras perteneciente al yerbal de Ñacunday, incluso mecanizó parte del Parque Nacional de Ñacunday, donde está el Salto del Ñacunday.

Otro suceso ligado al conflicto de tierra ocurrió en la localidad de Curuguaty (Candindeyú), donde ocupantes de una propiedad conocida como Campo Morombi, perteneciente a Blas N. Riquelme, se enfrentaron a cascos azules de la Policía Nacional frente a la Fiscalía local, dejando como saldo una veintena de heridos. Los manifestantes reclamaron la destitución de los fiscales Miguel Ángel Rojas y Ninfa Mercedes Aguilar,

a quienes acusaron de corruptos. Los sin tierras intentaron ingresar en la sede de la Fiscalía, pero fueron reprimidos por las fuerzas policiales. Según el jefe del INDERT local, Ignacio Vera, la propiedad reclamada por los ocupantes sería un excedente. Los ocupantes también se quejaron de que el fiscal Rojas también figura como ternado del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de juez. Consideraron que esta situación no se puede dar, ya que está acusado por persecución a campesinos. Los manifestantes piden la expropiación de la propiedad destinada a reserva en el kilómetro 35 de la colonia Ybyrá Pytá, del distrito de Curuguaty.

En el departamento de San Pedro fueron realizados varios desalojos por parte de la Policía y la Fiscalía, con un saldo de 94 personas detenidas por ocupación. En el operativo Tacuatí, luego de tres años de ocupación de la propiedad de la Asociación Civil Nuevo México, fueron detenidas 12 mujeres, de las cuales 6 estaban con sus respectivos hijos, quienes posteriormente fueron entregados a otros familiares. Las mismas fueron imputadas por la fiscalía. Según el informe oficial de la Policía Nacional, se realizaron desalojos en cinco propiedades, con la detención y aprehensión de 197 personas.

Por su parte, el juez Penal de Garantías de Iruña (Alto Paraná), Omar Vallejos, ordenó la prisión del dirigente carpero, Rosalino Casco, por haber violado las medidas que le

estableció para concederle la libertad ambulatoria, en una causa de invasión de inmueble y coacción, por el que está procesado. El dirigente tenía prohibido acercarse a un radio de mil metros a los inmuebles que habían sido ocupados en abril del año 2011, según la orden judicial firmada por el magistrado del juzgado de Iruña. Así también, 97 personas quedaron detenidas durante el allanamiento del campamento de carperos en la localidad de Torocuá, distrito de Ñacunday. Posteriormente los mismos fueron liberados bajo medidas alternativas a la prisión, por el juez Omar Vallejos, del Juzgado Penal de Garantías de Iruña. Actualmente unos 101 carperos están procesados por “invasión de inmueble y resistencia”; en una, la carpeta abierta por una denuncia de los abogados de la firma Agrotoro, propiedad del Grupo Favero, quienes sostienen que los sin tierras se encuentran acampados actualmente en la propiedad privada de la empresa.

cuadro de conflictos

DEPARTAMENTO	LUGAR	AÑO DE OCUPACIÓN	AÑO DE INICIO	HECTÁREAS	FAMILIAS	SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIONES
Alto Paraná	Chacore'i, Itakyry	2012	s/d	400	120	Amenaza de ocupación	Propiedad de Erico Carvalho Lemos y una firma denominada Agro Integración SA
Alto Paraná	Ñacunday	2011	2011	12000	12000	Levantar campamento	Propiedad de Tranquilo Favero
Alto Paraná	Colonia Parambú,	2012	2011	12000	7000	Ocupación	Uno de los propietarios es Leonir Antonio Calza
Alto Paraná	Colonia La Fortuna, Hermandarias	2012	s/d	400	120	Desalojo	Propiedad de Agro Integración SRL y los socios Ernan Maldaner y Erico Carvalho.
Alto Paraná	Santa Rosa del Monday	2012	2011	200	50	Ocupación (traslado de Ñacunday)	Pertenece al Banco Nacional de Fomento (BNF), pero es reclamado por dos brasileros de apellido Lazzarotto
Caaguazú	Estancia Entre Ríos, Raúl Arsenio Oviedo	2012	s/d	750	180	Ocupación	Propiedad del suizo Jacob Srtebel
Caaguazú	Tembiaporá	2012	s/d	1700	50	Ocupación	Propiedad de la empresa Agroganadera Pindó (menonitas)
Canindeyú	Campo Mborombi, Colonia Yvyrapyta, Curuguay	2011	s/d	2098	212	Ocupación	Propiedad de Blas N. Riquelme
Concepción	Estancia Tres Hermanos, Pacurí	2012	s/d	5800	400	Ocupación y Desalojo	Propiedad de Luis Mario Saldivar
Guairá	Paso Yobái	2012	s/d	s/d	s/d	Ocupación y Desalojo (23 detenidos)	La propiedad de la Sociedad Civil Berthal

cuadro de conflictos

DEPARTAMENTO	LUGAR	AÑO DE OCUPACIÓN	AÑO DE INICIO	HECTÁREAS	FAMILIAS	SITUACIÓN ACTUAL	OBSERVACIONES
San Pedro	Santa Rosa del Aguaray, Tacuatí	2011	2010	1820	50	Ocupación y Desalojo (12 mujeres detenidas)	Propiedad de la Sociedad Civil Nuevo México (menonitas)
San Pedro	Colonia San José del Norte, Gral. Resquín	2012	2012	771	70	Ocupación y Desalojo	Propiedad de Gilberto Carlos Arnoit
San Pedro	Potrero Naranjo	2012	s/d	50	70	Ocupación y Desalojo (50 detenidos)	Propiedad de Soriano González
San Pedro	Estancia Alegre, Nueva Germania	2012	s/d	2660	150	Ocupación y Desalojo	Pertenece al grupo YtáYbaté S.A.
San Pedro	Jejuí	2012	s/d	s/d	95	Desalojo	La propiedad pertenece a Emilio Ramírez Russo
San Pedro	Compañía Rincón, Nueva Germania	2012	s/d	2800	70	Reocupación	Sergio Giménez, es uno de los directivos del Establecimiento Valle Ybaté SA
San Pedro	Colonia Tacuatí Poty, Tacuatí	2012	s/d	360	70	Ocupación y Desalojo (32 detenidos)	El inmueble pertenece a Edemilson Domínguez, ciudadano brasileño
San Pedro	Capiibary	2012	s/d	2800	200	Ocupación y retirada de campamento	Propiedad del brasileño Omar Trueller
San Pedro	Colonia 4 Vientos, Gral. Aquino	2012	s/d	600	100	Ocupación y retirada de campamento	Propiedad de la Cooperativa Volendam de la colonia menonita
Itapúa	Colonias Unidas, Obligado	2012	s/d	100	130	Ocupación	La propiedad pertenece a 9 personas
Itapúa	Morotigüé, San Pedro del Paraná.	2012	s/d	1000	100	Amenaza de ocupación	Teodoro Aquino se adjudica como dueño

ejecutivo

INTERVIENE AL INDERT



Ante una serie de publicaciones de la prensa sobre supuestas ventas de propiedades en el Chaco en forma irregular por parte del INDERT, el titular del ente, Marciano Barreto, desmintió dichas acusaciones y anunció que realizará las investigaciones correspondientes para aclarar el caso.

Por su parte, miembros del Sindicato de Trabajadores del INDERT (SINTRAINERT) y del Sindicato de Trabajadores del ex IBR (SINTIBR) pidieron la destitución de Barreto ante las denuncias de corrupción y anunciaron que solicitarán la intervención del ente. Pese a la crisis desatada en el interior del ente agrario se inició la mensura en el Departamento de Itapúa sobre 14.772 fincas que comprenden tres distritos

de esa zona y uno de Caazapá. Las cuatro distritos tienen en total 162.152 hectáreas y pertenecen a la finca n.º 98 de Jesús y Trinidad y el padrón n.º 1.770 del distrito de Tava'i. El supuesto excedente de tierras en Itapúa y Caazapá fue denunciado en el 2004, ante el ente agrario, por la Comisión 15 de Mayo de Pirapey y fue concedido este año por el juez de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del

5.º turno de la tercera circunscripción judicial de Itapúa, Juan Casco Amarilla. Sin embargo, el INDERT no descarta que estas propiedades puedan ser las mismas que figuran en la orden judicial de setiembre del año pasado, la cual ordena la mensura de distritos ubicados dentro de los departamentos de Itapúa, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú y Alto Paraná, que hoy en día está suspendida por el juzgado de

Santa Rita por una cuestión de competencia de jueces.

Cuando se realizó la denuncia en ese año, el INDERT abrió el expediente 3.359/04 como punto de inicio del proceso de investigación. Bajo la presidencia de Erico Ibáñez se dictó la resolución 1.032/05, por la cual se designaba a un equipo técnico-jurídico como responsable para promover el juicio de mensura sobre las mencionadas fincas. Según Barreto, desde ese momento el proceso judicial se vio obstaculizado por una serie de incidentes, que fueron retrasando la orden judicial. Finalmente, a inicios de este año, la Justicia dictaminó a favor de la realización de la medición, con lo cual se dio continuidad a su ejecución. Esta nueva orden judicial se da en momentos en que carperos reclaman en Ñacunday 162.000 hectáreas que son, en gran parte, propiedad del sojero brasileño Tranquilo Favero y de otros 25 colonos. Las otras tierras reclamadas por los carperos son Cedrales y Santa Rosa del Monday, ambas ubicadas en Alto Paraná. Cabe recordar que el Estatuto Agrario faculta al INDERT a promover mensuras judiciales de oficio o a pedido de parte, según los artículos 104 y 108, de la Ley 183/02.

Marciano Barreto presentó al Ejecutivo una lista de 79 propiedades adjudicadas irregularmente bajo el stornismo. Dicha lista está encabezada por el propio Alfredo Stroessner, Andrés Rodríguez y Lino Oviedo, entre otros, forma parte del informe que identificó 25.649 hec-

táreas de tierras malhabidas en Alto Paraná y la zona de Ñacunday, las cuales deben ser recuperadas por la Procuraduría General de la República que poco o nada ha hecho hasta ahora para reivindicar estas tierras a favor del Estado. El presidente de la República nombró al asesor Emilio Camacho como interventor del ente agrario y suspendió a Marciano Barreto en sus funciones. La falta de respuestas a la crisis de Ñacunday fue el detonante de la medida. La investigación del Gobierno determinó la existencia de 30.000 hectáreas, pero que muchas de las propiedades fueron arrendadas por los propios funcionarios del INDERT a empresarios sojeros. A ello suma la corrupción que no fue saneada por Barreto ni otros funcionarios anteriores que ingresaron en este Gobierno. Camacho explicó que debe elevar un informe sobre el estado de la institución, la situación de las tierras públicas y de todas las acciones emprendidas. UH 28.02.12 Política.

Otra de las medidas que anunció el Gobierno luego de intervenir el INDERT fue la suspensión de las mensuras en el Departamento de Itapúa. Según Emilio Camacho el Ejecutivo respetará la propiedad privada y que serán inflexibles en la recuperación de las tierras. "Las mensuras iniciadas en el Departamento de Itapúa vamos a suspender; recurriremos a un mecanismo judicial y procesal por el cual se desiste transitoriamente, en términos jurídicos, de la instancia que nos da el derecho o de la acción a revisar

eso. Por lo tanto, las mensuras que afectaban a productores en Itapúa van a ser retiradas para un mejor estudio de caso por caso", sostuvo el letrado. UH 01.03.12 Política.

El ex presidente del INDERT, Alberto Alderete, opinó que el ente rural sigue teniendo la misma estructura que heredó de IBR, con los mismos funcionarios y un sistema institucional muy burocrático que llevó a altos niveles de corrupción, con un sector del funcionariado altamente ineficiente. Según Alderete la institución rural no cuenta con registros históricos actualizados de los beneficiarios de la mayoría de sus colonias, por lo que la intervención sería difícil. UH 25.02.12 Política.

El ex presidente del INDERT, Eugenio Alonso, afirmó que la solución a la problemática de la tierra se debe realizar dentro del marco legal, y mediante una concertación entre los tres poderes del Estado. El ex funcionario público consideró que el INDERT es una institución de tercer o cuarto rango que no solucionará el problema de la tierra, porque no tiene el poder suficiente. Alonso comentó que luego de unos años de haberse adjudicado, en el asentamiento Mbujapey, 30 lotes sujetos a la reforma agraria, le tocó intervenir, verificando que de los 30 lotes, 28 de ellos habían sido vendidos a políticos y ganaderos de la zona. Ante dicha situación, Alonso dijo que el 15 de abril del año pasado presentó un plan de trabajo con metas alcanzables, para realizar la radiografía de unos 300 asentamientos,



de los 2.000 que existen en el país. Alonso dijo que luego recibió del presidente la comunicación que dejaba el cargo. El proyecto había sido entregado a Marciano Barreto, pero se desconoce si llegó o no a ejecutar. UH 02.03.12 Política.

El Instituto INDERT confirmó que más de 35.000 hectáreas de la colonia María Auxiliadora, de Fuerte Olimpo (Alto Paraguay) están en poder de ganaderos brasileños y uruguayos. La comunidad, creada en 1996, tiene 38.000 hectáreas, de las cuales solo 3.000 son ocupadas por 35 familias beneficiadas por el Estado. El dictamen, firmado por la abogada Norma

Valiente, directora general de la Asesoría Jurídica del INDERT, sugiere a la presidencia de la institución la urgente conformación de un equipo interventor. Debe estar integrado por agrimensores, abogados, funcionarios de Catastro Occidental y/o demás dependencias involucradas en la administración de colonias en la región del Chaco. ABC 10.03.12 Interior.

Una comitiva del INDERT, encabezada por el interventor, abogado Emilio Camacho, comenzó la regularización de tierras en la colonia Italiano Cue, lugar denominado Tabucaí, del distrito de Cedrales, departamento de Alto Paraná. Anunció que

como primera medida entregarán títulos a unos 15 paraguayos que están afincados en el lugar.

La colonia está compuesta de 1.522 hectáreas de tierras, con 189 lotes habilitados. Los técnicos verificaron en tres días un total de 23 lotes, de los cuales 15 están ocupados por paraguayos, mientras 8 están mecanizados y en manos de personas que no pueden ser sujetas de la reforma agraria, según explicó el ingeniero Sergio Ortega, gerente de Colonias y Tenencias del INDERT.

La colonia fue creada en 1994 y por la Ley de la Reforma Agraria los lotes pueden ser

revendidos recién en el 2014, es decir, 20 años después. Sin embargo, la mayoría ya está en poder de terceros, ya que los beneficiados con este sistema vendieron sus derechos, según explicaron los integrantes de la comitiva. No obstante, en los registros, los inmuebles siguen figurando a nombre de los antiguos dueños, cuyos paraderos se desconocen. ABC 25.03.12 Interior.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

El titular del MAG, Enzo Cardozo, trasladó toda la responsabilidad del problema existente con las ocupaciones de propiedades en Nacunday al INDERT y minimizó el grado de involucramiento que la

cartera a su cargo debe tener en el conflicto. El secretario de Estado sostuvo que la institución a su cargo “no tiene responsabilidad en este tema”. Agregó que es el INDERT el organismo que debe aplicar las medidas correctivas en la situación. Añadió que, tras el trabajo del INDERT, la cartera agraria debe iniciar la tarea de generar el arraigo productivo de las personas beneficiadas. “Nuestro trabajo se desarrolla a partir de la creación de los asentamientos, pero no afrontamos la problemática de las tierras. Es el INDERT la institución que se encarga de esta situación”, recalcó. El titular de la cartera agraria indicó que esta situación es un legado de gobiernos anteriores y que, como tal, no se pue-

de corregir en corto tiempo. Agregó que, como no existen documentos, no se puede activar apañando en parte la actitud del Gobierno central en este caso. La realización de un catastro nacional, con énfasis en la zona de conflicto, es la principal solución, precisó el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo. Preciso que luego de contar con este documento, el Gobierno podrá tomar una decisión sobre el caso. Reconoció que existe una importante cantidad de gente que urge el acceso a las tierras, pero que ese proceso se debe basar en documentos, de modo a no caer en los mismos problemas. Agregó que el catastro, sumado a un relevamiento de datos, podrá



ayudar a clarificar el panorama de las tierras. UH 08.03.12 Política.

COMISIÓN VERDAD Y JUSTICIA

Según un informe de la Comisión Verdad y Justicia entregado en 2008, de las 24.000.000 de hectáreas (ha.) adjudicadas a nivel país, un total de 7.851.295 ha. son mal habidas. Los beneficiarios, en su mayoría, son millonarios. Según el informe, el Paraguay tiene una superficie de 40.675.200 hectáreas, de las cuales 7.851.295 hectáreas son malhabidas. Ello se desprende de un estudio de documentos realizado, que data desde 1954 hasta el 2003. La Comisión examinó un total de 200.705 adjudicaciones con sus respectivas documentaciones, que obran en los registros del INDERT y en la Dirección General de Registros Públicos. El resultado de ello "es la evidencia" de la existencia, aún, de inmuebles adjudicados ilegalmente. Así también el informe señala que en el periodo que abarca desde 1954 a 2003 el Estado realizó 200.705 adjudicaciones de lotes, que comprenden una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una superficie total de 3.497.781 hectáreas, que corresponden a la Región Oriental, y 7.985 lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Región Occidental. La Comisión evidenció que la diferencia existente entre cantidad de lotes y cantidad de adjudicatarios obedece a que en varios casos un mismo adjudicatario

se benefició con más de un lote. La Comisión Verdad y Justicia también proveyó una lista detallada de las personas que fueron beneficiadas en su momento con la venta de tierras, consideradas de manera irregular. Entre los mayores beneficiados de las tierras, el documento del organismo mencionado señala a: Alfredo Stroessner, general Andrés Rodríguez, Blas N. Riquelme, Humberto Domínguez Dibb, Julio Domínguez, Conrado Pappalardo, Luis María Zubizarreta, José Alberto Planás y Lucio Vergara. UH 15.02.12 Política.

En un intento por evitar el desalojo de los carperos en la zona de Ñacunday, el Gobierno ahora les ofreció 30.000 hectáreas de tierras, pertenecientes al INDERT, en las zonas aledañas, para que los mismos puedan acampar transitoriamente en tanto se solucione el conflicto. La propuesta del Gobierno consiste en trasladar el campamento de los campesinos a las tierras públicas en las zonas aledañas (Italiano Cué-Cedrales, Yacaré Cuá-Cedrales, o una propiedad disponible en Alto Verá), de acuerdo a los datos aportados por el INDERT. El Ejecutivo se propuso además constituir una Comisión Técnica integrada por representantes de la Presidencia de la República, del INDERT y de la comisión vecinal Santa Lucia, para el relevamiento de las alternativas disponibles en el inventario del Instituto Rural. Según El secretario general y jefe de Gabinete, Miguel López Perito, el plazo ya venció y, al no haber respuesta, el Minis-

terio del Interior debe tomar las medidas necesarias para empezar hoy el protocolo de desalojo a cientos de familias apostadas en la zona. UH 21.02.12 Política.

La directora del Registro Público, Lourdes González, explicó que la finca 4036 en Ñacunday, Alto Paraná, que pertenece a la empresa del sojero Tranquilo Favero, y otros colonos brasiguayos tienen todos sus papeles en regla. La funcionaria refirió, sin embargo, que existe un agujero negro en las 257.000 hectáreas que reivindica el Estado, o sea, no están ubicadas por el momento. Para la directora del Registro Público, no existen tierras disponibles en las propiedades acreditadas al rey de la soja. También aclaró que existe una gran diferencia entre excedente y resto de propiedades. El Estado había pedido que la Justicia intervenga para dilucidar el problema en Ñacunday, Alto Paraná. Existe una duda en el mismo Gobierno acerca de la existencia de excedentes en la mencionada zona. UH 23.02.12 Política.

El procurador de la República advirtió que la recuperación de las tierras públicas mal adjudicadas será un proceso sumamente complejo y largo, y que no arriesgará al Estado en juicios cuyo fracaso es casi seguro. El procurador general de la República, José Enrique García, dijo que los dirigentes campesinos y los políticos mienten cuando dicen que el Estado puede recuperar de forma inmediata tierras públicas adjudicadas supuestamente de manera irregular,

basándose exclusivamente en datos testimoniales, como el informe sobre tierras que elaboró la Comisión de Verdad y Justicia. El representante legal del Estado expresó que esa información (la de la Comisión de Verdad y Justicia) necesita ser corroborada administrativa y judicialmente, antes de que se pueda iniciar siquiera una acción legal con el objetivo de conseguir la nulidad de los títulos de quienes fueron adjudicados irregularmente, y la consecuente recuperación de la tierra para el Estado. García señaló que el informe al que tanto se hace referencia es solo una recopilación de datos sobre personas que formaban parte del régimen stonista o que tenían algún tipo de condición de privilegio bajo ese gobierno, y que en algún momento fueron adjudicadas con tierras del Estado. Sin embargo, con relación a esos casos, hay dos elementos a considerar, explicó: primero, si era lícito o no que esas personas fueran beneficiadas; y, segundo, el tiempo transcurrido y las transferencias que se pudieron haber hecho de la propiedad desde la adjudicación. El procurador dijo que el Estado no puede renunciar a su derecho y obligación de investigar cada uno de los casos y de iniciar las acciones legales si existen posibilidades de recuperación. Señaló, sin

embargo, que la preparación de cada caso insume una gran cantidad de tiempo. Explicó que hasta ahora la Procuraduría ha podido corroborar administrativamente unos doscientos casos que se encuentran en etapa de preparación para el inicio de una acción legal, o ya en proceso.

UH 07.03.12 Política.

COORDINADORA DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS MALHABIDAS

Los miembros de la Coordinadora de Recuperación de Tierras Malhabidas se reunieron con el interventor del INDERT, Emilio Camacho, a quien solicitaron la necesidad de encontrar un mecanismo para recuperar las propiedades que fueron entregadas de manera irregular años anteriores. Los miembros de la organización entregaron al encargado del ente agrario un documento donde expresan la existencia de 26.000.000 de hectáreas donde el 50% serían malhabidas y el resto se encuentran dentro de los 50 kilómetros de la franja de seguridad fronteriza. “Hemos entregado los papeles al interventor y nos prometió que estudiará el caso dentro del tiempo que tiene y después nos dará una respuesta”, señaló Tomás Zayas, miembro de la Coordinadora. La

organización insiste en que hay tierras malhabidas, contradiciendo la tesis del interventor del INDERT, quien admitió que en Alto Paraná no hay tierras disponibles ya que todas estaban ocupadas. Zayas mencionó que también pidieron conocer en detalle el proceso que está llevando Camacho al frente de la intervención y refirió que espera que la medida sirva no solo para enfocarse en la problemática de la tierra sino también para depurar la institución, donde según dijo, impera la corrupción. Camacho les señaló que todas las quejas contra la gente del INDERT serán derivadas al mismo presidente, Fernando Lugo, quien podrá adoptar la medida necesaria para dar por finalizada la situación que preocupa a las organizaciones. En otro punto, el interventor del INDERT explicó a la organización que el procedimiento que se está realizando en Alto Paraná consiste en efectuar una verificación in situ de las colonias que están en la zona de Ñacunday e Iruña, que se denominan Ñacunday I y Ñacunday II. Los técnicos emitieron un primer informe donde señalan que en vez de colonias, las tierras estaban mecanizadas con plantaciones de soja. Las mismas fueron revendidas. UH 09.03.12 Política.

informativo campesino

Esta es una publicación trimestral que ofrece análisis, comentarios y un panorama de los hechos que afectan al sector campesino. Utiliza como fuente los periódicos del país, los boletines de distintas organizaciones e investigaciones propias. Realizamos canjes. El pago de la suscripción cuando es realizado en cheque, debe estar a nombre del Centro de Documentación y Estudios.

publicaciones:



pedidos al:

Centro de Documentación y Estudios
Cerro Corá 1426 e/Paí Pérez y Perú
Tel.: 225 000 / 204 295
Fax: 595 21 213 246
www.cde.org.py
Casilla Postal: 2558
Email: cde@cde.org.py
sociogre@cde.org.py
Asunción, Paraguay

tarifa de suscripción 4 números

	INDIVIDUAL	INSTITUCIONAL
Paraguay	Gs. 130.000	Gs. 150.000
América Latina	USD. 50	USD. 50
Resto del Mundo	USD. 60	USD. 60

precio del ejemplar: Gs. 25.000.-

Impreso Franqueo a Pagar
Res. N° 211/00/D/SG
Tarifa Reducida
Resolución 47/2008/DC/SG

